Mario Enrique Correal Martínez
Abogado
correalasociados@hotmail.com – mariocorreal.mec@gmail.com
Tel: 3142594557

Señora

Juez(a) Segundo de Familia de Zipaquirá

Atte. Dra. Nelly Ruth Zamora Hurtado

E. S. D.

Ref. Sucesión Radicación 20210019800

201900353 proveniente Juzgado Primero de Familia

Causante: Néstor Jairo Orjuela Torres

E. S. D.

Respetada Señora Jueza:

Soy MARIO ENRIQUE CORREAL MARTINEZ, identificado con c.c. 19'201.771 de Bogotá, portador de la tarjeta profesional No. 58840 del C.S. de la J, obrando en mi carácter de apoderado judicial de señora Andrea María Lozada, quien a su vez representa al menor ELO dentro del proceso liquidatario citado en referencia, me dirijo respetuosamente por medio del presente escrito para manifestar que de conformidad con lo establecido en el artículo 318 del CGP y estando dentro del término legal, interpongo recurso de reposición y en subsidio apelación contra el proveído de fecha quince (15) de noviembre de dos mil veintidós (2022), en el cual se expone que atendiendo mi manifestación (archivo digital 36) – sic -, dice haber puesto en mi conocimiento el auto de fecha 25 de abril de 2022 (archivo digital 32) – sic - aceptando la revocatoria del poder conferido por la señora Andrea María Lozada Hernández, decisión contra la cual no se presentó recurso alguno, encontrándose en firme la decisión. Este mismo auto continúa diciendo: ... "Con todo, en auto de esta misma fecha se reconoce apoderado a la citada señora, por tal razón, si considera que debe iniciar investigaciones disciplinarias en contra de cualquier operario judicial o abogado, se le recuerda que está en su derecho de acudir ante la autoridad competente para tal fin. Como quiera que existe memorial poder del cual aún no se ha hecho pronunciamiento alguno, de conformidad con lo dispuesto en los arts.74 y 75 del C.G.P., se reconoce personería al abogado Amador Riaño León para que actúe en nombre y representación de la señora Andrea María Lozada Hernández, en los términos y para los fines del poder conferido (archivo digital 30). En consecuencia, no se accede a la solicitud del citado abogado Correal (archivo digital 37-40), esto es, dejar sin efecto el auto que aceptó revocatoria de poder, ya que en el mismo no se observan irregularidades procesales que deban ser saneadas, máxime cuando la petición viene de la manifestación de voluntad de la interesada. Como quiera que la manifestación allegada por la abogada Lina Grande Velandia en

archivo digital 44-45, no contiene solicitud alguna que deba resolver el Juzgado, se abstiene este despacho de pronunciamiento. De otra parte, remítase el link del expediente a la abogada Grande Velandia conforme a su petición en archivo digital 47 y déjese constancia. NOTIFÍQUESE, NELLY RUHT ZAMORA HURTADO JUEZ.” Hasta aquí esta providencia del 15 de noviembre de 2.022, objeto de ataque en el presente escrito.

Sustentación del Recurso

1) Sea lo primero retomar brevemente la explicación y soportes de mi escrito que el juzgado recibió el 20 de mayo del presente año, con el cual impugne el proveído del 25 de abril de esta misma anualidad- En él, dejé explicado el tema de la ilegalidad de un auto o providencia, que no voy a transcribir nuevamente porque en (archivo digital 37-40), está la explicación y exposición de motivaciones de hecho y derecho para haber solicitado dejar sin efecto la providencia que acepto la revocatoria del poder.

2) Su Juzgado en el proveído del 25 de abril del corriente año, dispuso aceptar la revocatoria al poder conferido por la señora Andrea María Lozada Hernández en representación de su menor hijo Emmanuel Orjuela Lozada al abogado Mario Enrique Correal Martínez y, en consecuencia, conforme al inciso 3o del artículo 76 del C.G.P., para los fines legales pertinentes, líbrese el correspondiente telegrama al profesional del derecho comunicándole lo aquí dispuesto.

Al respecto, debo rechazar esta afirmación, puesto que, el juzgado no hizo llegar el telegrama que alude, o si no, le pido que entregué la evidencia; me enteré, no por el juzgado con el supuesto telegrama, sino que, di a conocer al juzgado el 18 de mayo de este año, desde mi correo: mariocorreal.mec@gmail.com, que la señora Andrea María Lozada Hernández envió a mi correo el 28 abril de 2022, a las 16:34, cuando el auto había cobrado ejecutoria, una comunicación, absurda, arguyendo que le era imposible comunicarse conmigo (leer mi escrito con el que impugné el proveído del 25 de abril del corriente año). De tal forma que su juzgado, al conocer mi escrito, procedió a enviarme el 19 de mayo del presente año, la providencia citada, o sea la del 25 de abril, refiriendo a la revocatoria del poder, cuando ya obviamente dicho auto estaba n firme y ejecutoriado; por consiguiente, no es aceptable, que el juzgado al pronunciarse sobre mi solicitud, diga en este su auto impugnado (15 de noviembre de 2.022), que contra el auto del 15 de abril no se presentó ningún recurso, obviamente que no, pues por sustracción de materia, no se podía por los siguientes motivos:

- a)** El juzgado no envió el susodicho telegrama para enterrarme, no hay prueba en el expediente.

Mario Enrique Correal Martínez

Abogado

correalasociados@hotmail.com – mariocorreal.mec@gmail.com

Tel: 3142594557

- b)** El juzgado viene a enterarse que yo me enteré, (valga la redundancia), cuando hago llegar mi escrito el 18 de mayo de esta anualidad.
- c)** Después de más de seis (6) meses desde la última entrada al despacho 23 de mayo del año que avanza, y, eso porque hice llegar al juzgado un escrito solicitando impulso procesal e intervención de vigilancia judicial, salió este auto del 15 de noviembre de 2.022, el cual considero cuestionable con fundamento en los siguientes aspectos:
- 1)** De un lado, el proveído fechado el 25 de abril del corriente año, aceptó la revocatoria al poder que Andrea María Lozada Hernández me confirió en representación del menor Emmanuel Orjuela Lozada y, cita un supuesto telegrama que nunca llegó.
 - 2)** Con todo, en auto de esta misma fecha reconoció apoderado (inciso 2) a la citada señora, así dice el proveído del 15 de noviembre del presente año, que estoy atacando; de manera que, o aceptó revocatoria sin reconocer nueva personería judicial, o solo hasta ahora la está reconociendo.
 - 3)** De otro lado, refiere el juzgado en este proveído del 15 de noviembre de esta anualidad, que, por encontrarse poder, del cual aún no se ha hecho pronunciamiento alguno, de conformidad con lo dispuesto en los arts.74 y 75 del C.G.P., se reconoce personería (inciso 3 de este auto), al abogado Amador Riaño León para que actúe en nombre y representación de la señora Andrea María Lozada Hernández, en los términos y para los fines del poder conferido (archivo digital 30).
 - 4)** Contradicciones es lo que se encuentra, en el auto del 15 de noviembre de 2.022.
 - 5)** Percibo un desafío del juzgado al decir en la segunda parte del proveído del 15 de noviembre del presente año que: "si considera que debe iniciar investigaciones disciplinarias en contra de cualquier operario judicial o abogado, se le recuerda que está en su derecho de acudir ante la autoridad competente para tal fin". Creo que hay un desafío, porque el juzgado debe saber que el auto del 25 de abril del año presente, es ilegal, tal como lo esboce en mi memorial denominado ilegalidad del auto fechado el 25 de abril de 2.022, concretamente numeral 1 del proveído; la ilegalidad resumida es: La Ley 1123 del 2007 comprende el código disciplinario del abogado; habla de los deberes y obligaciones de los sujetos procesales y de los Abogados: 1. Aceptar un proceso sin paz y salvo del abogado que venía actuando es falta disciplinaria. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura advirtió que aceptar un poder sin exigir paz y salvo del

Mario Enrique Correal Martínez

Abogado

correalasociados@hotmail.com – mariocorreal.mec@gmail.com

Tel: 3142594557

abogado al que le fue revocado constituye falta disciplinaria, según el artículo 36.2 de la Ley 1123 del 2007.

6) El juzgado antes de dictar proveído de aceptación de revocatoria de poder, debió percibir el cumplimiento de este requisito, no lo hizo.

7) La providencia es ilegal por eso pedí dejarla sin efecto porque por vía de jurisprudencia, se observa que los autos manifiestamente ilegales no cobran ejecutoria y por ende, no atan al Juez.

8) La Corte Constitucional T-1274 de 2005 para indica que “como se puede apreciar la jurisprudencia de la corte constitucional en garantía del debido proceso a (sic) definido alcances a esta figura la cual no puede ser indefinida en el tiempo, a efectos de garantizar la seguridad que deben pregonar los jueces de la república” indicando que el auto inicial fue proferido el 13 de abril de 2016 y el auto que lo dejó sin efectos y es objeto del presente recurso fue proferido el 24 de abril de 2017, por lo que transcurrió entre el uno y el otro un término de un año y once días, de tal forma que no cumple el requisito de inmediatez que ha aceptado nuestra honorable Corte Constitucional para dar aplicación a la revocabilidad de autos.

9) El Libro Segundo, Parte Especial, Título I del código disciplinario establece deberes e incompatibilidades del abogado – deberes Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: numeral 20. Abstenerse de aceptar poder en un asunto hasta tanto no se haya obtenido la correspondiente paz y salvo de honorarios de quien venía atendiéndolo, salvo causa justificada. Este artículo no se cumplió y su Juzgado no exigió el cumplimiento. Artículo 36. Constituyen faltas a la lealtad y honradez con los colegas: 1. Realizar directamente o por interpuesta persona, gestiones encaminadas a desplazar o sustituir a un colega en asunto profesional de que este se haya encargado, u ofrecer o prestar sus servicios a menor precio para impedir que se confiera el encargo a otro abogado. 2. Aceptar la gestión profesional a sabiendas de que le fue encomendada a otro abogado, salvo que medie la renuncia, paz y salvo o autorización del colega reemplazado, o que se justifique la sustitución. Su Juzgado no exigió ni advirtió antes del preferir el cuestionado auto del 25 de abril del corriente año, debiendo hacerlo para impedir pronunciamiento ilegal que puede general irregularidad procesal o violación al debido proceso y causaría una acción constitucional de tutela por sustracción de materia.

Mario Enrique Correal Martínez
Abogado
correalasociados@hotmail.com – mariocorreal.mec@gmail.com
Tel: 3142594557

Con la exposición anterior, veo que el juzgado en el inciso segundo del proveído atacado (15 de noviembre de 2.022), mencionó lo siguiente que... "por tal razón, si considera que debe iniciar investigaciones disciplinarias en contra de cualquier operario judicial o abogado, se le recuerda que está en su derecho de acudir ante la autoridad competente para tal fin.

No es costumbre mía discutir con los Jueces de la República, pero si es mi deber como Abogado, que cuando hay un pronunciamiento que percibo no es correcto, tengo que pronunciarme.

Sostener que estuvo bien el auto del 25 de abril del año en curso, es desconocer el Artículo 132 Código General del Proceso. Control de legalidad, para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación.

Por lo antes expuesto, pido al juzgado, revocar el proveído de fecha 15 de noviembre del corriente año, dejando sin efecto el reconocimiento de personería al abogado Amador Riaño León en nombre y representación de la señora Andrea María Lozada Hernández, hasta tanto no se haga llegar paz y salvo con lo ordena la Ley señalada y el código disciplinario, así como los pronunciamientos de la Corte Constitucional señalados aludidos.

De no revocarse la providencia impugnada, interpongo recurso de apelación como lo permite el artículo 320 y s.s. del C.G.del P., para que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados, para que el superior revoque o reforme la decisión.

Cordialmente

MARIO ENRIQUE CORREAL M.

MARIO ENRIQUE CORREAL MARTINEZ
c.c. 19'201.771 de Bogotá
T.P. 58840 C. S. de la J.